

## DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL INCISO SEGUNDO Y PARAGRFO QUINTO DEL ARTICULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993

J & PUERTO ABOGADOS <jspuertoabogados@gmail.com>

Lun 03/05/2021 11:22

**Para:** Secretaria3 Corte Constitucional <secretaria3@corteconstitucional.gov.co>

**CC:** jpuerto638@gmail.com <jpuerto638@gmail.com>

 4 archivos adjuntos (16 MB)

DEMANDA INCONSTITUCIONALIDAD.pdf; DEMANDA FIRMADA Y ESCANEADA.pdf; CEDULA DE CIUDADANIA - DTE - 1.pdf; CEDULA DE CIUDADANIA- DTE-2.pdf;

Señores:

CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

**REF.: DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA EL INCISO SEGUNDO Y EL PARÁGRAFO 5 DEL ARTÍCULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993.**

LUIS ALBERTO PUERTO MARTINEZ identificado con el número de cédula No. 19.266.434 de Bogotá y JUAN SEBASTIÁN PUERTO DIAZ identificado con el número de cedula No. 1.024.541.654 de Bogotá, en ejercicio del derecho consagrado en el numeral sexto del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, con fundamento en el Decreto Reglamentario 2067 de 1991, ante usted, en documento adjunto en formato PDF, nos permitimos presentar la demanda de referencia para su trámite.

Atentamente.

LUIS ALBERTO PUERTO MARTINEZ  
CC. 19.266.434  
DEMANDANTE

JUAN SEBASTIAN PUERTO DIAZ  
CC. 1.024.541.654  
DEMANDANTE



Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

**REF.: DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA EL INCISO SEGUNDO Y EL PARÁGRAFO 5 DEL ARTICULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993.**

LUIS ALBERTO PUERTO MARTINEZ identificado con el número de cedula No. 19.266.434 de Bogotá y JUAN SEBASTIAN PUERTO DIAZ identificado con el número de cedula No. 1.024.541.654 de Bogotá, en ejercicio del derecho consagrado en el numeral sexto del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, con fundamento en el Decreto Reglamentario 2067 de 1991, ante usted, me permito interponer DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD contra el **INCISO SEGUNDO Y EL PARÁGRAFO 5. DEL ARTICULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993 ADICIONADO POR EL ARTICULO 1 DE LA LEY 1250 DE 2008, Y EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY 2010 DE 2019 RESPECTIVAMENTE**, por vulneración directa del derecho a la dignidad humana, derecho a la igualdad, derecho a las personas de la tercera edad, derecho a la seguridad social, del artículo 2, 13, 46 y 48 de la Constitución Política, bajo los argumentos que a continuación me permito exponer:

Para fundamentar la presente demanda, de conformidad al Decreto ley 2067 de 1991, estableció el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que se surten ante esta Corte, concretamente, en el artículo 2º. dispuso que las demandas de inconstitucionalidad deben satisfacer unos requisitos mínimos: "(i) el señalamiento de las normas acusadas, bien sea a través de su transcripción literal o de la inclusión de un ejemplar de una publicación oficial de las mismas; (ii) la indicación de las normas constitucionales que se consideran infringidas; (iii) la exposición de las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; (iv) cuando ello resultare aplicable, el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y (v) la razón por la cual esta Corporación es competente para conocer de la demanda".

**NORMA DEMANDADA OBJETO DE DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD**

A continuación, se transcribe el texto legal demandado, subrayando los apartes de la disposición respecto de los cuales se cuestiona la constitucionalidad.

**1).LEY 100 DE 1993**

(Diciembre 23)

Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre de 1993

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones

**ARTÍCULO 204. MONTO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS COTIZACIONES.**

(....)

**Inciso 2.**

<Inciso derogado tácitamente con el párrafo 5 adicionado por el artículo 142 de la Ley 2010 de 2019> <Aparte tachado INEXEQUIBLE> <Inciso adicionado por el artículo 1 de la Ley 1250 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> **La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional**, la cual se hará efectiva a partir del primero de enero de 2008.



**PARÁGRAFO 5o.** <Parágrafo adicionado por el artículo 142 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el siguiente:> La cotización mensual en salud al régimen contributivo a cargo de los pensionados para los años 2020 y 2021 se determinará mediante la siguiente tabla:

Mesada pensional en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)	Cotización mensual en salud
1 SMLMV	8%
>1 SMLMV y hasta 2 SMLMV	10%
>2 SMLMV y hasta 5 SMLMV	12%
>5 SMLMV y hasta 8 SMLMV	12%
>8 SMLMV	12%

A partir del año 2022, se aplicará la siguiente tabla:

Mesada pensional en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV)	Cotización mensual en salud
1 SMLMV	4%
>1 SMLMV y hasta 2 SMLMV	10%
>2 SMLMV y hasta 5 SMLMV	12%
>5 SMLMV y hasta 8 SMLMV	12%
>8 SMLMV	12%

### **NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS**

El enunciado de las disposiciones normativas de orden constitucional que se ven transgredidas con la vigencia del parágrafo de la ley que se censura son los siguientes:

#### **DERECHO A LA IGUALDAD**

**ARTICULO13-** Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 34, 37, 51, 60, 63, 69, 82 y 87

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

## **DIGNIDAD HUMANA**

**Artículo 1-** Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

## **SEGURIDAD SOCIAL**

**Artículo 48.** La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

## **PERSONA DE LAS TERCERA EDAD- SUJETO DE PROTECCION CONSTITUCIONAL**

**Artículo 46-** El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.

## **PRETENSION**

Se solicita a la honorable Corte Constitucional se declare INEXEQUIBLE el inciso segundo y el parágrafo quinto del artículo 204 de la Ley 100 de 1993 por las razones que se exponen en la presente demanda.

De manera subsidiaria, y en caso de que esta Honorable Corporación no encuentre motivos para declarar la inconstitucionalidad de la norma acusada, se solicita de la manera más respetuosa se declare la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA de la norma, señalando la debida interpretación y aplicación que deberá realizarse de la misma.

## **OBJETO DE LA LEY QUE SE PRETENDE LA INEXEQUIBILIDAD**

## **CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL**

La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad.

## **CONCEPTO DE PENSION**

terminación de la relación laboral el cumplimiento por parte del trabajador de los requisitos para obtener su pensión de vejez-en esa oportunidad se determinó que dicha provisión era razonable bajo



pensión como una contraprestación de los ahorros efectuados durante su vida laboral, y será un medio para gozar de un descanso en condiciones dignas". No obstante, enfatizó que no puede existir solución de continuidad entre la terminación de la relación laboral y la iniciación del pago efectivo de la mesada pensional, toda vez que con la misma se pretende asegurar que el trabajador y su familia cuenten con el ingreso mínimo vital.

Sentencia T-426/18, Referencia: Expediente T-6.732.006, MG. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS (19) de octubre de (2018)

### **CONCEPTO DE SALUD**

Inicia con la vigencia de la ley 100 de 1993, indicando las personas obligadas a cotizar al sistema de salud, luego del 2007 se estableció el porcentaje a pagar por parte del empleado y empleador, y por último en el decreto 2353 de 2015 se aclaró las personas incluidas dentro del régimen contributivo de salud.

## **LA EXPOSICIÓN DE LAS RAZONES POR LAS CUALES DICHOS TEXTOS SE ESTIMAN VIOLADOS.**

En cumplimiento a los requisitos mínimos, en cuanto a la exposición de los motivos por las cuales el precepto normativo censurado es contrario a la Carta Política, debidamente indicados por esta misma Corporación ha sostenido que el actor tiene la carga de formular un "*reproche concreto de naturaleza constitucional*". En este contexto, la sentencia C-1052 de 2001 estableció que las razones presentadas deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.

La jurisprudencia sistematizó estos requisitos, así:

- (i) **claridad**, se refiere a que la argumentación **esté hilada y los razonamientos sean comprensibles**;
- (ii) **certeza**, **exige la formulación de cargos contra una proposición jurídica real**, y no una deducida por el actor e inconexa con respecto al texto legal.
- (iii) **especificidad**, exige concreción en el análisis efectuado.
- (iv) **pertinencia**, está relacionada con **la existencia de reproches de naturaleza constitucional, que se basen en la confrontación del contenido de una norma superior con el del precepto demandado**, no en argumentos meramente legales o doctrinarios, ni en puntos de vista subjetivos o de conveniencia.
- (v) **suficiencia**, cuando la acusación no sólo es formulada de manera completa sino que, además, es **capaz de suscitar en el juzgador una duda razonable sobre la exequibilidad de las disposiciones acusadas**.

A continuación, expreso los motivos concretos en contra del artículo demandado, cercenan los derechos y principios del texto constitucional y líneas jurisprudencial decantada por esta corporación.

1). Como primera medida expresare los motivos que la vigencia del inciso segundo del artículo 204 de la ley 100 de 1993, vulnera directamente los lineamientos constitucionales.

2). Para terminar, exponiendo los argumentos que a juicio del suscrito la vigencia del párrafo 5 de la ley 100 de 1993 afecta directamente los preceptos constitucionales.

### **CARGOS CONTRA LA PROPOSICION JURIDICA.**

#### **1). INFRACCION INCISO SEGUNDO y PARAGRAFO QUINTO DEL ARTICULO 204, DEL DERECHO A LA IGUALDAD.**



## **1.1. Existencia de trato diferencial entre la población afiliada al régimen contributivo en salud.**

Sobre este cargo, vale la pena iniciar citando lo dispuesto en el estatuto de seguridad social, a su turno en el artículo 157 de la ley 100 de 1993, reglamenta las personas incluidas dentro de régimen contributivo, a su turno se indica:

**ARTÍCULO 157. TIPOS DE PARTICIPANTES EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.** <Artículo condicionalmente EXEQUIBLE> A partir de la sanción de la presente Ley, **todo colombiano participará en el servicio esencial de salud** que permite el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Unos lo harán en su condición de **afiliados al régimen contributivo o subsidiado** y otros lo harán en forma temporal como participantes vinculados.

### **A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.**

Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:

1. Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo son las personas vinculadas a través de **contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes** con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley.

Por la anterior, revisado el grupo de afiliados al sistema – OBLIGADOS A COTIZAR AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, se concluye que existe más de un grupo de personas obligadas a cotizar al sistema de pensiones según su actividad económica, el cual se **incluye el grupo de personas pensionadas sin exponer concepto alguno respecto del valor cotizado o ingresos mensuales en salarios mínimos.**

Texto normativo incluida dentro del articulado de la misma ley 100 de 1993, del cual se configura reproche constitucional, debido a que se desconoce que aparte del grupo de los pensionados, existen más personas objeto de tributo, a saber, personas con contrato de trabajo, servidores públicos y trabajadores independientes. Para que entre todas las personas obligadas del tributo se distribuya de forma PROPORCIONAL, para efectos de tasar debidamente el porcentaje de cotización para cada uno de los obligados. Debido a que, sobre este asunto, el porcentaje de cotización no es ajustado al marco constitucional, puesto que se tiene una clara diferencia entre el aporte que es objeto de cotización en salud por parte de la población vinculada por medio de contrato de trabajo (contrato laboral) y las personas debidamente reconocidas en calidad de pensionados.

Dicho proceder legislativo, desconoce el derecho a la igualdad, ya que teniendo varios sujetos de tributos - **empleados dependientes, empleados oficiales, contratistas**, solo se graba uno de los grupos antes indicado, sin tener en cuenta que se debe fundamentar razonablemente, el motivo por el cual se toma dicha decisión ---sin justificación de fondo bajo las reglas de ponderación para efectos de indicar el motivo por el cual solo se afectó con mayor porcentaje de tributo a la población de pensionados desde la entrada en vigencia inciso segundo del artículo 204 de la ley 100 de 1993.

Olvidando entonces por el legislativo, que los pensionados son personas que han cotizado continua e interrumpida a la pensión por más de 20 años, con un porcentaje de descuento de nómina del 4% mes a mes de su salario por todo este tiempo, para luego de reunidos ciertos requisitos se le pueda reconocer la pensiones en sus diferentes modalidades y pagar la mesada pensional correspondiente.

Por otro lado, la reducción equitativa del aporte, lejos de ser una medida acertada y en derecho, desconoce el derecho a la igualdad debido a que no aplica dicho tributo para toda la población



decisión.

Respecto de la vulneración del derecho a la igualdad por la disposición atacada por vía constitucional, en aras de ventilar la FALTA DE PONDERACION DEL TRIBUTO hacia el grupo de PENSIONADOS, debemos tener en cuenta lo dispuesto del porcentaje de cotización a salud de los demás obligados a cotizar al régimen de salud, contra en porcentaje de cotización de las personas pensionadas.

Artículo 204 de la ley 100 de 1993, a su turno dispone:

Según lo dispuesto por el **artículo 10 de la Ley 1122 de 2007**. El nuevo texto es el siguiente:> La cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. **La cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%.**

(....)

**PARÁGRAFO 1o. La base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos,** afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, **será la misma contemplada en el sistema general de pensiones de esta Ley.**

**PARÁGRAFO 2o. Para efectos de cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes,** el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos.

Por otro lado, y en el mismo artículo establece el porcentaje de cotización de la población de pensionados, que a partir de la vigencia del artículo 1 de la ley 1250 de 2008, corresponde a:

<Inciso derogado tácitamente con el párrafo 5 adicionado por el **artículo 142 de la Ley 2010 de 2019**> <Aparte tachado INEXEQUIBLE> <Inciso adicionado por el **artículo 1 de la Ley 1250 de 2008**. El nuevo texto es el siguiente:> La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados será del **12% del ingreso de la respectiva mesada pensional**, ~~la cual se hará efectiva a partir del primero de enero de 2008.~~

(....)

Por lo tanto, luego del estudio de la norma en censura, **-ARTICULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993-** respecto el porcentaje de cotización a cargo de los afiliados al régimen contributivo en salud, se encuentra en total DESPROPORCION el porcentaje de tributo de la población pensionada con el resto de la población obligada cotizar al sistema de seguridad social en salud.

Del mismo modo, Luego de estudiada los avances legislativos respecto de la cotización de las personas con contrato de trabajo contra el porcentaje de cotización de los pensionados, se observa con sorpresa que, para el año 2007, se establece el porcentaje de cotización actual para las personas con contrato de trabajo, con la entrada en vigencia del **artículo 10 de la Ley 1122 de 2007**, y para el año posterior, esto es 2008, se regulo el valor a cargo de los pensionados; estableciendo entonces desde esa fecha un margen de cotización entre estos dos sujetos de contribución de forma desproporcionada, injustificada, y por lo demás infundada.

Configurando entonces con la vigencia del la **Ley 1250 de 2008, que adiciono el inciso segundo del artículo 204 de la ley 100 de 1993**, transgrede derechos constitucionales y legales, y va en contravía de los fines del estado en razón a que si bien, a juicio del legislativo se debe aumentar el tributo a pagar por los afiliados al sistema de salud, dicho tributo debía – y TIENE QUE SER- PROPORCIONAL Y PONDERADO entre todos los sujetos debidamente clasificados dentro del grupo de afiliados al régimen contributivo en salud según lo dispone el artículo 157 de la ley 100 de 1993 .



carga, sino mantener el tributo sobre el porcentaje que se venía pagando, previo a registrar el cambio de afiliado al régimen, para a partir de su reconocimiento adquirir la calidad de pensionado.

### **1.2). INFRACCION POR VIA DIRECTA DEL DERECHO A LA IGUALDAD, CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL PARAGRAFO 5 DEL ARTICULO 204 DE LA LEY 100 DE 1993**

Respecto de esta infracción al ordenamiento constitucional, del citado artículo objeto de censura, tenemos que desde el pasado año 2008 se dispuso como porcentaje de cotización para el grupo de pensionados el 12 % de su mesada pensional.

Sobre el concepto de mesada pensional me permito indicar lo siguiente:

La **mesada pensional** es la asignación que recibes periódicamente cuando has alcanzado la pensión a la que tuviste derecho por cotizar al sistema, cumpliste los requisitos de edad, semanas o en ahorro según sea tu caso, así como, cuándo alcanzas el derecho por los servicios que prestaste antes de conseguir la pensión en tu lugar de trabajo siempre y cuando estuvieras cotizando. (1).

Misabogados.com.co. (19 de octubre de 2016). ¿Qué es la mesada pensional?. <https://www.misabogados.com.co/blog/que-es-la-mesada-pensional#:~:text=La%20mesada%20pensional%20es%20la,de%20conseguir%20la%20pensi%C3%B3n%20en>

Sobre el mismo punto, la H. Corte constitucional concepto lo siguiente:

### **3. El derecho al goce efectivo de las mesadas pensionales cuando se esté en imposibilidad física y/o mental. Requisitos para la administración transitoria del patrimonio**

La Constitución Política en su artículo 48 ha establecido que la seguridad social es un derecho fundamental de las personas, así como un servicio público de carácter obligatorio e irrenunciable que el Estado debe dirigir, coordinar y controlar. Este Tribunal ha definido la seguridad social a través de su jurisprudencia como el: *"conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus familias, las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano."*<sup>101</sup>.

En ese orden de ideas, la pensión se constituye en una **prestación de carácter vitalicio para aquellas personas que no pueden laborar por circunstancias de vejez o invalidez**, por ello está protegida por la Constitución y por la ley en su régimen de Seguridad Social. Un ejemplo de este blindaje se encuentra en la Ley 100 de 1993, **en la que se estipula la prohibición de embargo a la pensión con la finalidad de proteger el derecho al mínimo vital de los pensionados**, igualmente, la exigencia de la presentación personal del pensionado para que sea el mismo quien reclame las mesadas pensionales consignadas a su favor. (cita propia).

Por lo anterior, se concluye que el pensionado, luego de adquirida dicha calidad, no recibe salario sino un valor denominado mesada pensional, el cual corresponde a un porcentaje del valor cotizado sin la posibilidad de recibir el mismo valor cotizado durante los últimos años en ningún caso, por lo que, de ese porcentaje a reconocer como mesada pensional por el fondo correspondiente, esta estrictamente ligado a las semanas y monto cotizado según el régimen pensional del afiliado. Por lo que en cualquiera de los casos no es el mismo valor que se devengaba por concepto de salario.

Para luego concluir que, el pensionado queda obligado a cotizar un valor de cotización en salud, mucho mas alto y a toda luz desproporcionado que los demás sujetos de pago de dicha contribución. Y no solo esa infracción se advierte, si no que hasta el pasado año 2019, con la entrada en vigencia de artículo 142 de la Ley 2010 de 2019, el cual a su turno, dispone una serie de reducciones a dicha contribución, en razón al valor de la mesada pensional, sin indicar en dicho texto normativo, las razones constitucionales, legales y jurisprudenciales, y de ser el caso doctrinales para poder así,

1). Centro de escritura, Javeriano (Ed.). (2013). Normas ABA. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado



hasta el valor de 2 SMLMV, sin olvidar entonces las personas que cotizan con un valor mas alto.

La vigencia del inciso demandado, infringe el artículos 13, además del artículo 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el artículo 7° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por las siguientes razones: (i) **existencia de trato diferencial entre los afiliados al régimen contributivo en salud, los cuales gozan de los mismos derechos y no hay justificación constitucional que justifiquen el trato diferencial**; y (ii) los pensionados siendo el único sujeto del régimen contributivo en salud, obligado a pagar la carga tributaria mayor al resto de sujeto de tributo, desconociendo entonces el derecho a la tercera edad y en consecuencia vulnerando el derecho a la seguridad social. III). La medida legislativa adoptada en el 2019, no es del todo proporcional, como quiera que solo favorece a un pequeña minoría del grupo de pensionados del sistema de seguridad social.

## **2). Infracción directa del artículo 46 y 48 constitucional con la vigencia del inciso segundo del artículo 204 de la ley 100 de 1993.**

2.1). Sea lo primero determinar que entendemos por – pensionado- concepto extraído de sentencia que fue proferida en su oportunidad por esta misma corporación.

***los pensionados siendo el único sujeto del régimen contributivo en salud, obligado a pagar la carga tributaria mayor, desconociendo el derecho a la tercera edad y en consecuencia vulnerando el derecho a la seguridad social***

### **PERSONA PENSIONADA**

Se entiende a “la terminación de la relación laboral el cumplimiento por parte del trabajador de los requisitos para obtener su pensión de vejez-en esa oportunidad se determinó que dicha provisión era razonable bajo el entendido de que ningún empleado quedaría desamparado “pues tendría derecho a disfrutar de la pensión como una contraprestación de los ahorros efectuados durante su vida laboral, y será un medio para gozar de un descanso en condiciones dignas”.”

(...)

Toda vez que con la misma se pretende asegurar que el trabajador y su familia cuenten con el ingreso mínimo vital.

Sentencia T-426/18, Referencia: Expediente T-6.732.006, MG. JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS (19) de octubre de (2018)

Por lo anterior, y respecto a los requisitos para pensionarse tenemos que conforme a al **artículo 9 de la Ley 797 de 2003**, el cual modificado el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, estableciendo las condiciones para acceder a la pensión de vejez, que a su turno dispuso:

***Haber cumplido 55 años de edad en el caso de las mujeres y 60 años en el caso de los hombres. A partir del 1° de enero de 2014, la edad se incrementará en 2 años en cada caso, es decir, 57 años las mujeres y 62 años los hombres.***

***Haber cotizado un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo. A partir del 1° de enero de 2005 el número de semanas se incrementarán en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementarán en 25 cada año hasta llegar a 1300 semanas en 2015.***

Dicho esto, tenemos que si una persona mayor de edad inicia su actividad laboral, a partir de cumplida la mayoría de edad en Colombia – 18 años de edad- y si su intención es pensionarse- debe cotizar al sistema mínimo 26 años de forma continua para efecto que sea reconocida, con el cumplimiento de requisitos establecidos por la ley.



personas de la tercera edad, y los adultos mayores,

El concepto **“adulto mayor” fue definido en la Ley 1276 de 2009.** (...) De cara a lo dispuesto por el Legislador en esa norma, será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de **“desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”.** (cita propia).

Por su parte, la calidad de *“persona de la tercera edad”* solo puede ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor.

Por lo que una persona al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse – 57 años de edad mujeres y 62 hombres, pertenecen al grupo de denominado “adulto mayor”. Y que con el cumplimiento de la edad reconocida por el DANE como edad de esperanza de vida, se convierte en -personas de tercera edad-

Sobre los lineamientos de las personas de la tercera edad, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICA – DANE dispuso que:

*Durante el periodo comprendido entre 2015 y 2020, conforme el documento titulado “Indicadores Demográficos Según Departamento 1985-2020. Conciliación Censal 1985-2005 y Proyecciones de Población 2005-2020” emitido por el DANE<sup>[32]</sup>, la esperanza de vida al nacer para la totalidad de la población en Colombia (sin distinguir entre hombres y mujeres), **se encuentra estimada en los 76 años.** Por lo tanto, una persona será considerada de la tercera edad solo cuando supere esa edad, o aquella que certifique el DANE para cada periodo específico.*

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, se puede concluir que las personas cotizantes al sistema de seguridad social, como afiliados al sistema contributivo luego de cotizar más de 20 años al sistema y cumplido una serie de requisitos adquieren la su calidad de pensionados, tanto hombres como mujeres, luego de cumplida la edad mínima para pensionarse, ingresan al grupo de adultos mayores. Puesto que superar los 55 años y basta con el paso de tiempo, HECHO CIERTO Y NOTORIO, para que la persona pensionada cumpla los 76 años de edad, y así, superen la esperanza de vida establecida cada año por el **DANE** para efectos de ser incluidos dentro de las personas de la tercera edad sujetos de protección constitucional.

Dicho esto, el inciso segundo del art 204 de la ley 100 de 1993, desconoce que las personas pensionadas no adquieren dicha calidad de la misma forma que una persona vinculada a contrato de trabajo o vinculada con el estado en calidad de funcionario públicos, sino que se requiere de un periodo amplio de cotización y el cumplimiento de unos requisitos para poder obtener la pensión. – más de 20 años continuos de cotización generando entre muchas cosas el *desgaste físico, vital* al momento de ser reconocida la pensión por el fondo correspondiente.

Por lo anterior, una cotización mayor para las personas pensionadas, siendo este concepto más elevado que el resto de población - sin una justificación constitucional legítima-, transgrede no solo principios sino el derecho a la seguridad social, dignidad humana, tercera edad.

Por lo que a juicio del demandante, es viable el reparo por vía constitucional de la norma objeto de censura, en razón a que se evidencia vulneración de preceptos constitucionales, y legales para determinar y clasificar bajo de las reglas de ponderación, el porcentaje a cotizar del grupo de pensionados.

2.2). INFRACCION DIRECTA PUESTO QUE SE CONFIGURA INAPLICACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO, CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL PORCENTAJE DE CONTIZACION EN SALUD.



que no previó ningún tipo de solidaridad al momento de fijar la contribución al sistema de seguridad social en salud a cargo de los pensionados, obviando las condiciones particulares de las personas de avanzada edad.

Desconociendo entonces por el legislativo, la clasificación contemplada en la ley 100 de 1993, la cual a su turno, crea dos grupos del sistema de seguridad social en salud – contributivo y subsidiado. A saber:

### **A. Afiliados al Sistema de Seguridad Social.**

*Existirán dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud:*

1. **Los afiliados al Sistema mediante el régimen contributivo** son las personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago. Estas personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen contributivo de que trata el capítulo I del título III de la presente Ley.

2. <Ver Notas del Editor> <Texto corregido en los términos de la Sentencia C-458-15> **Los afiliados al Sistema mediante el régimen subsidiado de que trata el Artículo 211 de la presente Ley son las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización.** Serán subsidiadas en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo, personas tales como las madres durante el embarazo, parto y postparto y período de lactancia, las madres comunitarias\*, las mujeres cabeza de familia, los niños menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de Hansen, las personas mayores de 65 años, ~~los discapacitados~~ <persona en situación de discapacidad>, los campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales independientes, artistas y deportistas, toreros y sus subalternos, periodistas independientes, maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de pago.

**ARTÍCULO 211. DEFINICIÓN.** El régimen subsidiado es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la presente Ley.

Revisado lo dispuesto en la ley 100 de 1993, se concluye que, existen dos tipos de afiliados al sistema de seguridad social en salud, a su turno, el primero es el único obligado a generar un aporte mensual al sistema para el sostenimiento del mismo, para ese efecto el legislador consigno en dicha norma y en las que la que la modifican o adicionan, la clasificación de las personas obligadas a cotizar, las cuales deben realizar un aporte al sistema de forma fija, en el caso de la población dependiente, el empleador asume con porcentaje de la cotización en salud del empleado y su turno, el empleado tiene la obligación de asumir el restante, así lo dispone el inciso primero artículo 204 de la ley 100 de 1993.

Por lo anterior, dichos empleados deben cotizar al sistema de salud, por un periodo mínimo de 20 años en calidad de afiliados al régimen contributivo, para luego de que cambia su situación jurídica de empleado a pensionado, con ocasión su otorgamiento de pensión ya sea bajo **El Régimen de Prima Media con prestación definida –RPM–** o **Régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–**

Adquiriendo la calidad de persona de la tercera edad, pensionado y sujeto de protección constitucional, lejos de continuar con el mismo porcentaje de aporte al régimen de salud, dicho concepto es aumentado hasta tres veces sin justificación legal o constitucional que así lo habilite.

Teniendo la posibilidad de seguir pagando el mismo porcentaje al sistema, que venía siendo descontado de forma mensual, en razón a su calidad de afiliado y cotizante al régimen contributivo, y

1) Centro de escritura Javeriano (Ed.). (2013). Normas APA. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado



ese sentido. lo cierto es que dicha posibilidad no existe en el ordenamiento jurídico,

Siendo que la medida respecto del porcentaje de tributo para la población pensionada, no es jurídicamente válida y desconoce los derechos constitucionales objeto de la presente acción en especial al derecho a la dignidad humana, igualdad y derecho a las personas de la tercera edad.

### **PROPOSITO CONSTITUCIONAL LEGITIMO-**

**Las razones que resultan legítimas para adoptar tratos diferenciales** deben **procurar, además, restringir en la menor medida posible, tanto el derecho general a la igualdad, como los demás derechos** y principios constitucionales que puedan verse involucrados (afectados, intervenidos) en la decisión. En tal sentido, las medidas deben ser *proporcionales*<sup>1</sup>.

La Corte ha expresado que para que un **trato diferenciado sea constitucionalmente válido**, debe tener un **propósito constitucionalmente legítimo**, y debe ser proporcional, en el sentido de que no implique afectaciones excesivas a otros propósitos constitucionalmente protegidos. La proporcionalidad del medio se determina, entonces, mediante una evaluación de su **“idoneidad para obtener el fin (constitucionalmente legítimo de acuerdo con el principio de razón suficiente); necesidad, en el sentido de que no existan medios alternativos igualmente adecuados o idóneos para la obtención del fin, pero menos restrictivos de los principios afectados; y proporcionalidad en sentido estricto**, esto es, que el fin que se persigue se alcance en una medida mayor a la afectación de los principios que sufren restricción, y particularmente, del principio de igualdad”

### **PROHIBICIÓN DE DAR UN TRATO DIFERENTE A DOS PERSONAS POR RAZONES DE SEXO, IDEOLOGÍA, COLOR DE PIEL, ORIGEN NACIONAL O FAMILIAR U OTROS SIMILARES.**

Tal como fue incorporado en la Constitución Política de 1991, el principio y derecho a la igualdad presenta una estructura compleja que comprende diversas facetas. En primer término, **el principio de igualdad ante la ley y la consecuente prohibición de discriminación constituyen una manifestación del Estado de Derecho**, y por tanto, de la exclusión de arbitrariedad en las decisiones públicas. **El carácter general y abstracto de la ley y la prohibición de dar un trato diferente a dos personas por razones de sexo, ideología, color de piel, origen nacional o familiar u otros similares**<sup>2</sup>, expresan las notas centrales de esta dimensión de la igualdad, usualmente denominada **“formal”**.

Esas consideraciones explican que la Corporación, en su jurisprudencia temprana, se haya ocupado ampliamente de la definición del principio y de las herramientas necesarias para su aplicación, tanto en el análisis de casos concretos como en el examen abstracto de constitucionalidad de las leyes. Así, desde

### **CRITERIOS DE PONDERACION DEL DERECHO A LA IGUALDAD**

Lo primero, porque **la igualdad siempre se analiza frente a dos situaciones o personas que pueden ser comparadas a partir de un criterio determinado y jurídicamente relevante;**

lo segundo, porque **toda sociedad debe adoptar decisiones políticas que implican, en un momento histórico, mayores beneficios para unas y cargas otras.** Esas decisiones, adoptadas por mecanismos democráticos, no pueden ser juzgadas *a priori*, como incompatibles con el principio de igualdad, sino que constituyen complejos problemas de justicia (distributiva), en los que la razonabilidad de las distinciones involucra principios que definen la visión y los fines que una comunidad política defiende para sí.

---

<sup>1</sup> Ver, sobre el principio de proporcionalidad, las sentencias T-015 de 1994, C-022 de 1996, C, T-230 de 1994, C-584 de 1997, C-309 de 1997. T-916 de 2002.



Además, a partir del mandato moral de dar un trato igual a los iguales y dar un trato desigual a las personas o situaciones diversas (y una de las primeras definiciones utilizadas por la Corte para aproximarse al concepto de igualdad)<sup>3</sup>, no se desprenden conclusiones evidentes en el análisis de situaciones concretas, pues no existen, en la práctica, situaciones idénticas, ni supuestos absolutamente diferentes<sup>4</sup>. Lo que se presenta, en cambio, son supuestos (situaciones, personas, grupos) con igualdades y desigualdades parciales, así que la tarea del juez consiste en determinar cuáles poseen mayor relevancia desde criterios normativos contenidos en el ordenamiento jurídico, para concluir si deben o no recibir el mismo tratamiento por parte del derecho<sup>5</sup>.

### TRATAMIENTO REPROFABLE POR VIA CONSTITUCIONAL- JUICIO DE RAZONABILIDAD

Por lo expuesto, no todo trato diferente es reprochable desde el punto de vista constitucional. Un trato diferente basado en razones constitucionalmente legítimas es también legítimo, y un trato diferente que no se apoye en esas razones debe considerarse discriminatorio y, por lo tanto, prohibido. Como lo que define el respeto o violación del principio-derecho a la igualdad son las razones en las que se funda una diferenciación de trato, el análisis de igualdad recibe, en un primer momento, el nombre de *juicio de razonabilidad*, y consiste en determinar si medidas adoptadas por los órganos competentes, que suponen una diferenciación entre dos grupos, están apoyadas en razones constitucionalmente legítimas.

la Corte ha establecido que un trato diferente basado en una razón constitucionalmente legítima puede resultar inconstitucional si restringe desproporcionadamente los derechos fundamentales de una (o de algunas) persona(s).

De esa forma, al análisis de igualdad se incorporó también el *juicio de proporcionalidad*, compuesto por los subprincipios de *idoneidad*, *necesidad* y *proporcionalidad en sentido estricto*

Sobre el principio de proporcionalidad, de forma reciente, cfr. Sentencias C-616 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), C-677 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), C-923 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-703 de 2010 (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).

Por tratarse de un tema ya decantado por la jurisprudencia constitucional no es necesario explicar ampliamente el contenido de esos subprincipios. Basta, para efectos de esta decisión, señalar que los dos primeros suponen un análisis de **medios afines**, en el que se estudia (i) si un medio es potencialmente adecuado para satisfacer un fin legítimo perseguido por el órgano que adopta la medida, y (ii) si existen medios alternativos que eviten la restricción de un principio o la hagan menos intensa; el tercero, a su turno, se concentra en determinar si esa medida satisface tan ampliamente un principio constitucional que se justifica una restricción (menor) de otro principio o fin constitucional. Ibidem. En las sentencias C-093 de 2001 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-673 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa,

### CRITERIOS BASICOS DE DISTRIBUCION.

La distribución de beneficios y cargas implica la decisión de otorgar o imponer algo a determinadas personas o grupos y, por lo tanto, una distinción, lo que demuestra la relación entre distribución e igualdad. En principio, para que los criterios de distribución no se opongan directamente al principio de igualdad, estos deben, (i) respetar el principio de igualdad de oportunidades de todos los interesados; (ii) ser transparentes, (iii) estar predeterminados y (iv) no afectar

<sup>3</sup> Ver, por ejemplo, las sentencias C-221 de 1992 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) y C-040 de 1993 (M.P. Ciro Angarita Barón).

<sup>4</sup> T-340 de 2010. (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).

1). Centro de escritura, Javeriano (Ed.). (2013). Normas APA. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado



en consideración a la naturaleza del bien o la carga a imponer, análisis que, por regla general, corresponde a las ramas legislativa y ejecutiva del poder público.

Por esa razón, la jurisprudencia constitucional decidió incluir en su análisis herramientas hermenéuticas de otro tipo de examen, de origen estadounidense, sobre las medidas potencialmente restrictivas del derecho a la igualdad. Este test de igualdad prevé, precisamente, la posibilidad de realizar escrutinios con diferentes grados de intensidad.

El test de igualdad norteamericano se caracteriza porque el examen se desarrolla mediante tres niveles de intensidad: (i) por regla general, se aplica un control débil o flexible, en el cual el estudio se limita a determinar si la medida adoptada por el legislador es potencialmente adecuada o idónea para alcanzar un fin que no se encuentra prohibido por la Constitución; (ii) el juicio intermedio se aplica a escenarios en los que la autoridad ha adoptado medidas de diferenciación positiva (acciones afirmativas). En este análisis el examen consiste en determinar que el sacrificio de parte de la población resulte proporcional al beneficio esperado por la medida frente al grupo que se pretende promover; (iii) por último, el examen estricto se efectúa cuando el legislador, al establecer un trato discriminatorio, parte de categorías sospechosas, como la raza, la orientación sexual o la filiación política. En tal caso, el legislador debe perseguir un fin imperioso, y la medida debe mostrarse como la única adecuada para lograrlo.

En resumen, el *test integrado* implica una aplicación del juicio de proporcionalidad con distintas intensidades, de acuerdo con el ámbito en el que se haya adoptado la decisión controvertida, y concretamente, propone mantener una relación inversamente proporcional entre la facultad de configuración del legislador y la facultad de revisión del juez constitucional, con el fin de proteger al máximo el principio democrático.

#### Necesidad del test.

*"5-. Un análisis elemental muestra que estos dos enfoques, lejos de ser contradictorios, son complementarios. Así, ambos pretenden determinar si el trato diferente tiene o no un fundamento objetivo y razonable, para lo cual examinan si dicho trato es o no un instrumento idóneo para alcanzar ciertos propósitos admitidos por la Constitución (...) Así, este juicio o test integrado intentaría utilizar las ventajas analíticas de la prueba de proporcionalidad, por lo cual llevaría a cabo los distintos pasos propuestos por ese tipo de examen: adecuación, indispensabilidad y proporcionalidad stricto sensu. Sin embargo, y a diferencia del análisis de proporcionalidad europeo, la práctica constitucional indica que no es apropiado que el escrutinio judicial sea adelantado con el mismo rigor en todos los casos, por lo cual, según la naturaleza de la regulación estudiada, conviene que la Corte proceda a graduar en intensidad cada uno de los distintos pasos del juicio de proporcionalidad, retomando así las ventajas de los test estadounidenses".*

#### OBLIGACION DE ARGUMENTACION DEL ACTOR- PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD

De cara a lo expuesto, es preciso señalar que la citada sentencia C-1052 de 2001, recalcó que el cumplimiento de la carga de argumentar mínimamente la pretensión de inconstitucionalidad se explica en que a partir de dicha fundamentación es que se efectúa el examen de la norma, toda vez que la revisión que se realiza no es oficiosa sino rogada, lo cual implica que *"efectivamente haya habido demanda, esto es, una acusación en debida forma de un ciudadano contra una norma legal"*.

En consecuencia, el demandante debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos ya mencionados, los cuales han sido considerados por la jurisprudencia constitucional como unos mínimos razonables para asegurar la participación de los ciudadanos en el control político al legislador[19]; y con base en ello, el juez constitucional podrá emitir el correspondiente pronunciamiento.

1. Asimismo, se ha establecido que toda demanda de inconstitucionalidad debe ser estudiada a la luz del principio *pro actione* -por razón de la naturaleza pública de esta acción[21]-, en virtud del cual cuando exista duda acerca del cumplimiento de los requisitos legales y jurisprudenciales de la demanda, esta se resuelve a favor del accionante, admitiéndola como

1) Centro de escritura Javeriano (Ed.). (2013). Normas APA. Cali, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado



ser llevada al absurdo de que la Corte resuelva sobre la exequibilidad de una norma construyendo el cargo ante la insuficiente argumentación de quien la interpuso.

El trabajador que se pensiona ve afectado el monto que recibe mensualmente por concepto de mesada pensional, toda vez que su cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud pasa de un 4% al 12%, incrementándose en un 8%. Por el hecho de ser pensionado.

la norma acusada vulnera el artículo 13 de la Constitución porque no impone el mismo trato a todos los pensionados (descuento del 12% por concepto de cotizaciones a salud) pese a que dentro de ese grupo se encuentran sujetos de especial protección constitucional, específicamente se refirieron a los adultos mayores y a las personas que presentan disminución de su capacidad laboral por una situación física o psíquica. A su juicio, el legislador debió crear una cotización diferenciada y menor para este grupo especial de pensionados.

Por lo anterior, al determinar los potenciales efectos nocivos de la medida, que contrarían abiertamente importantísimos postulados constitucionales que identifican el Estado Social de Derecho, el inciso segundo y parágrafo quinto del artículo 204 de la ley 100 de 1993, norma demandada, debe ser excluida del ordenamiento jurídico al constituirse como resultado del inapropiado uso del poder del legislador.

### **COMPETENCIA DE ESTA CORPORACION**

La Corte Constitucional es competente para conocer esta demanda en virtud artículo 241 de la Constitución Política colombiana por medio del cual se “confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los escritos y precisos términos de este artículo”, y dentro de esta norma, en el numeral cuarto (4to) tiene la función de “decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”.

### **COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL.**

No existe cosa juzgada en el presente caso, pues hasta la fecha la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma demandada, por lo cual procede un pronunciamiento de fondo al respecto.

### **TRÁMITE.**

El trámite que debe seguir la presente demanda es el señalado en el Decreto 2067 de 1991 y las normas que la adicionen y complementen, así como las normas y actos administrativos que a la fecha se hayan proferido en relación con las demandas como la que se presenta.




Consideramos que la demanda cumple con los requisitos de admisión ya que las razones expuestas son claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes, de acuerdo a los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional. En caso de que la Corte no considere que sea así, les solicitamos a los Honorables Magistrados aplicar el Principio Pro Actione.


### **NOTIFICACIONES.**

Recibo notificaciones en la Carrera 10 No. 15 – 39 oficina 706, la ciudad de Bogotá D.C  
jspuertoabogados@gmail.com, 3174119311

Atentamente.



**LUIS ALBERTO PUERTO MARTINEZ**  
CC. 19.266.434 de Bogotá



**JUAN SEBASTIAN PUERTO DIAZ**  
CC. 1024541654 de Bogotá